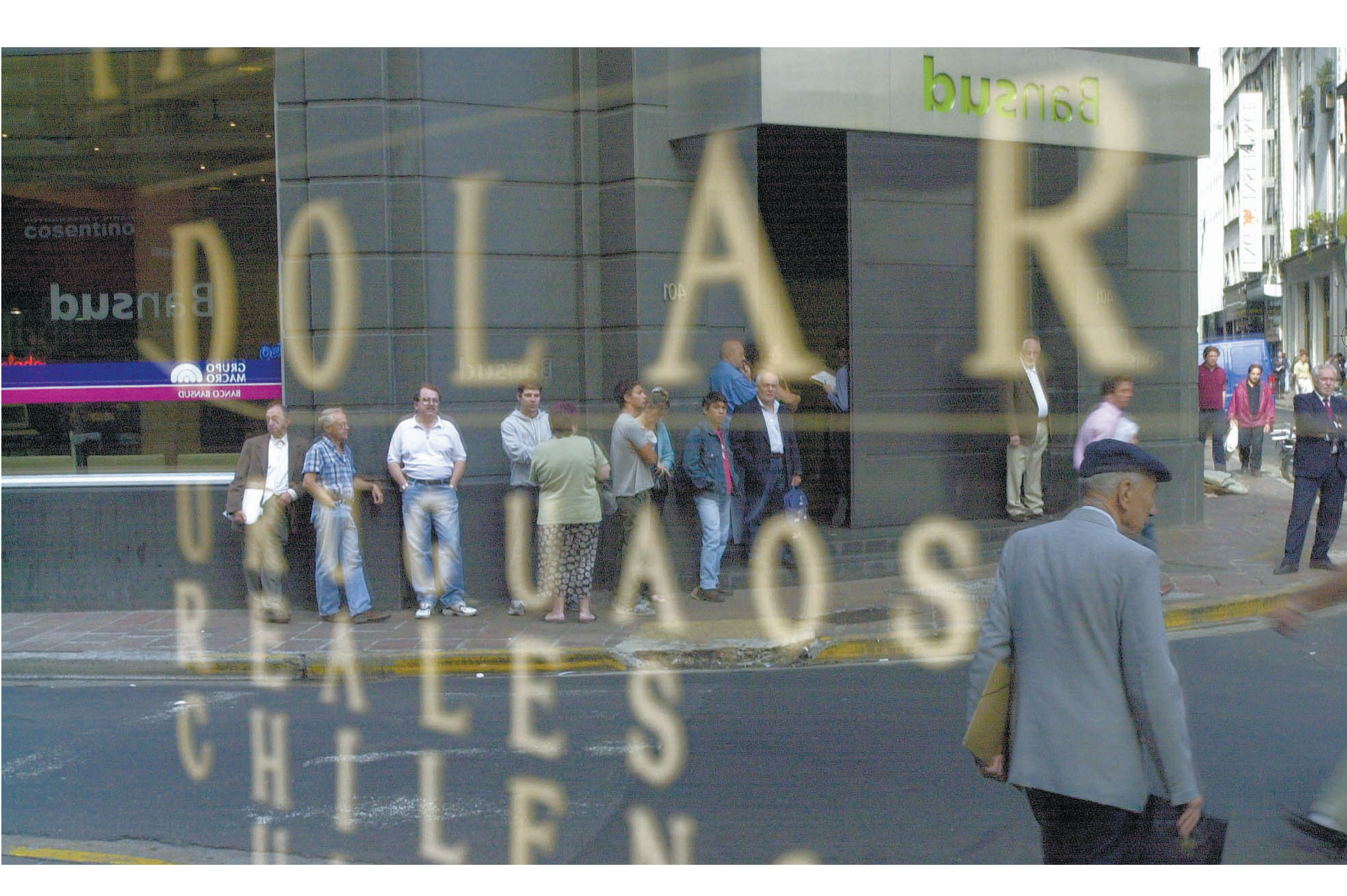
HISTORIA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA DEL SIGLO XX

Página|12



56

DEFAULT, MEGADEVALUACION Y PESIFICACION ASIMETRICA



Durante el 2002 se produjo una fuerte participación popular en asambleas barriales para debatir y proponer acciones ante la profunda crisis política, social y económica.

Staff

Director de la colección: Alfredo Zaiat

Director académico: Mario Rapoport
Coordinador: Ricardo Vicente
Colaboradores:
Andrés Musacchio
Eduardo Madrid
Hernán Braude
Agustín Crivelli
Martín Fiszbein
Pablo López
María Cecilia Míguez
Florencia Médici
Leandro Morgenfeld
Pablo Moldovan
Carolina Pontelli
Asistente de dirección: Natalia Aruguete

Director general: Hugo Soriani
Rumbo de diseño: Alejandro Ros
Diagramación: Juan Carlos Aguirre
Asistente de fotografía: Omar Chejolán
Coordinación general: Víctor Vigo

E-mail: *historiaeconomica@pagina12.com.ar*

Historia de la economía argentina del siglo XX
Mario Daniel Rapoport
1a. ed. - Buenos Aires: La Página, 2007.
16 p.; 28x20 cm.
ISBN 978-987-503-451-8
1. Investigación Periodística.
CDD 070.43
Fecha de catalogación: 03/08/2007



Adolfo Rodríguez Saá, luego de jurar como Presidente, recibe el abrazo de Ramón Puerta, titular del Senado, quien no se animó a asumir en esos días caóticos.

1 Cesación de pagos y los *presidentes de pocos días*

En el ocaso de la convertibilidad la desocupación estaba cerca del 20 por ciento, la pobreza impactaba sobre el 40 por ciento de la población y la indigencia se ubicaba en el 15 por ciento. En ese contexto, se intensificaban los caminos de resistencia social que expresaban la profundidad de la crisis. Se multiplicaban los comedores populares, se fortalecía la representatividad y la notoriedad mediática de los movimientos de desocupados y se extendía la toma de fábricas abandonadas por sus dueños. A fines de 2001 el país estaba sumergido en una de las crisis más profundas de su historia y el gobierno de Fernando de la Rúa se tambaleaba tras dos años de recesión.

La movilización de los sectores desplazados confluyó con los reclamos de la clase media castigada por la confiscación de sus ahorros con el corralito financiero. En las últimas horas del 19 y las primeras del 20 de diciembre de 2001, luego de un día de saqueos de autoservicios en el conurbano bonaerense y después de afrontar el repudio social en plena avenida Libertador de la Capital Federal renunció el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Horas más tarde, avanzada ya la tarde del 20, De la Rúa abandonó la Casa Rosada a bordo del helicóptero presidencial, dejando antes firmada su renuncia y decenas de muertos como resultado de la represión policial.

Durante la década del noventa la deuda pública recorrió un sendero de crecimiento explosivo. Su dinámica en los últimos años de la convertibilidad estuvo relacionada con la necesidad de conseguir divisas que permitiesen hacer frente al déficit externo del sector privado. De esa forma se buscaba evitar la contracción de la cantidad de circulante que derivaría en un encarecimiento del crédito y, en consecuencia, en la agudización de las tendencias recesivas. A partir de 1998 se sumó el impacto negativo de una sucesión de crisis financieras en los países denominados emergentes que dificultó aún más el acceso al financiamiento externo, elevándose así el costo del endeudamiento.

> El puntano Adolfo Rodríguez Saá anunció una batería de medidas. La más importante fue la declaración del default de la deuda pública, aplaudida de pie por el Congreso.

Para el 2001 la carga por los pagos de capital e inte-

reses de la deuda resultaba prácticamente imposible de afrontar. La administración De la Rúa decidió embarcarse en distintos planes que procuraban cambiar el horizonte de pagos de deuda, como el megacanje y los préstamos garantizados. No obstante, a pesar de las distintas renegociaciones, no hubo forma de hacer frente a los vencimientos inmediatos: la cesación de pagos era inevitable. Hasta que fue concluida la renegociación posterior durante el gobierno de Néstor Kirchner, se suspendieron todos los pagos de deuda salvo los correspondientes a los organismos internacionales, los préstamos garantizados y los Boden.

Dos días después de la renuncia de Fernando de la Rúa, la Asamblea Legislativa eligió al puntano Adolfo Rodríguez Saá para hacerse cargo de la sucesión presidencial. El nuevo mandatario anunció una batería de medidas que conformaban el programa con el que pretendía salir de la crisis. La más importante fue la declaración del default de la deuda pública, aplaudida de pie por el Congreso. A la vez, el nuevo gobierno ratificó la continuidad del régimen cambiario, aunque esbozaba una salida con la propuesta de creación de una tercera moneda, denominada el "argentino". Se suponía que, a pesar de no ser convertible, el "argentino" iría desplazando paulatinamente al peso, lo cual implicaba en los hechos una devaluación encubierta. Esta iniciativa dejaba en claro que el abandono de la paridad cambiaria era algo ineludible tras la declaración del default, pues el financiamiento externo, que era la única vía para mantener la paridad, ya no constituía una alternativa posible. La afirmación de la continuidad del 1 a 1 era, en realidad, una forma de buscar un proceso de transición no traumático, que no se concretó.

En el discurso de Rodríguez Saá se destacó como elemento central una de las principales banderas del peronismo: la justicia social. Prometió la creación de un millón de puestos de trabajo y aumentos del salario mínimo. Al mismo tiempo, sin perjuicio de caer en una manifiesta contradicción, planteó la necesidad de reforzar la austeridad fiscal, que había sido uno de los puntos básicos de la política económica del último gobierno radical.

Jaqueado por los gobernadores peronistas, que desconfiaban de las aspiraciones del puntano a mantenerse en el cargo más allá del período de tres meses que se había estipulado en la Asamblea, y por el descontento de vastos sectores de la población que repudiaban el retorno a la función pública de cuestionados funcionarios menemistas como Carlos Grosso, Rodríguez Saá se alejó del gobierno el 30 de diciembre. Las mismas cacerolas que estuvieron en la plaza pidiendo la dimisión de De la Rúa y Cavallo, diez días después acorralaron a Rodríguez Saá.

La renuncia dejó al país acéfalo durante unas horas. Luego de anunciarle al presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, que dimitiría y que éste tenía media hora para convocar a la Asamblea Legislativa para elegir nuevo presidente, Rodríguez Saá se retiró a San Luis, desde donde anunció por cadena nacional el abandono de la primera magistratura. El Presidente no había presentado su renuncia formal y ni Puerta ni el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, se mostraban dispuestos a asumir. Finalmente, ante la posibilidad de que la presidencia recayese en manos de la Corte Suprema, por entonces liderada por Julio Nazareno, Camaño tomó esa responsabilidad y poco más de 24 horas después convocó a la Asamblea Legislativa, que eligió al senador Eduardo Duhalde como primer mandatario.



La declaración del default de la deuda pública fue aprobada por aclamación en el Congreso.



El dólar alcanzó un máximo de 3,90 pesos en casas de cambio. Los bancos, privatizadas y multinacionales, apoyados por el FMI/Banco Mundial, alentaban la dolarización.

2 División de los grupos económicos. *Devaluación versus dolarización*

El derrumbe de la convertibilidad planteaba un serio interrogante acerca del futuro económico del país. Frente a ese panorama, los sectores de mayor poder se hallaban divididos, apuntalando distintos senderos a recorrer de acuerdo con sus posicionamientos en términos de activos y pasivos.

La reforma del Estado y la desregulación posibilitaron la articulación de intereses entre los acreedores de la deuda y los principales grupos locales en torno de la administración de las empresas públicas privatizadas. Esta configuración de poder resultó estable y trajo beneficios mutuos durante la primera mitad de los años noventa. Primero, asociados a la capitalización de los bonos de la deuda, que habían sido tomados como parte de pago a valor nominal. Luego, compartiendo los altos rendimientos en dólares que comenzaron a obtener las empresas estatales transferidas al capital privado. El esquema macroeconómico favoreció además la especulación financiera a través de una alta tasa de interés real. Por otro lado, en esos primeros años de la convertibilidad, las empresas industriales que pudieron adaptarse al nuevo entorno competitivo aprovecharon la recuperación del crédito que impulsaba la expansión de la demanda interna.

Hacia mediados de la década del noventa esa alianza comenzó a resquebrajarse. Los grupos locales decidieron deshacerse de los paquetes accionarios de las empresas privatizadas, materializando así abultadas ganancias patrimoniales. Gran parte de esos excedentes fueron colocados en el exterior, alimentando la fuga de capitales, o fueron destinados a tomar posiciones en la producción agroexportadora.

A la vez, las grietas en el esquema económico empezaban a quedar expuestas a partir de la progresiva apreciación del tipo de cambio y los altos niveles de la tasa de interés, situación que se terminó agravando con el comienzo de la recesión. Por el contrario, los capitales, mayoritariamente extranjeros, que ostentaban la propiedad de los servicios públicos seguían siendo beneficiados por un esquema que les proveía buenos dividendos en dólares debido al bajo nivel del tipo de cambio, a la funcionalidad del esquema regulatorio y a la baja elasticidad que presentaba la demanda de esos servicios.

La división al interior del establishment iba a ponerse entonces en evidencia en la etapa final del régimen. La crisis del 2001 enfrentó a dos fracciones que de una u otra manera se habían beneficiado del modelo de la convertibilidad y que pretendían ahora evitar pagar el costo de su salida. En el primer grupo se encontraban quienes impulsaban la dolarización como "estadio superior" de la convertibilidad. En ese lote se encontraban los capitales extranjeros que adquirieron empresas y paquetes acciona-


José De Mendiguren, titular de la UIA, asumió como ministro de la Producción de Duhalde. Fue uno de los impulsores de la megadevaluación.

rios en los noventa y querían asegurar las remesas en dólares a sus casas matrices, y el sector financiero favorecido por el diferencial de la tasa de interés y su transformación en dólares. El segundo grupo estaba compuesto principalmente por los grupos locales y algunos conglomerados extranjeros que tenían colocaciones financieras en el exterior y/o que se dedicaban a las actividades de exportación. Para ellos, la devaluación implicaba no sólo la posibilidad de cuantiosas ganancias patrimoniales sino también, y sobre todo, un aumento de la facturación en pesos por sus ventas en el exterior.

La puja entre estos dos grupos atravesó los primeros meses de la gestión de Eduardo Duhalde. Su presidencia decidió recostarse en el "Grupo Productivo", constituido por la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente, José De Mendiguren, sería designado ministro de la Producción; la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y Confederaciones Rurales Argentina (CRA). Entre las propuestas que este grupo venía sosteniendo se encontraban la flotación cambiaria, el default de la deuda externa y la pesificación de los contratos.

Sin embargo, a pesar de la voluntad explícita de ciertos sectores por impulsarla, la salida devaluacionista con default fue improvisada y resultó impuesta en la práctica por la dificultad de sostener un esquema inconsistente, que intentaba mantener el tipo de cambio real apreciado con una creciente carga de la deuda externa en un contexto de escasez de divisas. En tanto, la pesificación de las deudas y activos financieros fue definida por el temor a la quiebra del sistema financiero y de parte importante del sector productivo.

3 El gobierno de Eduardo Duhalde.
La gestión Remes Lenicov

Al asumir la presidencia, Eduardo Duhalde planteó un cambio en la forma de enfrentar la crisis. En su discurso enfatizó la importancia del mercado interno y el agotamiento del modelo de convertibilidad. La recuperación de la producción nacional, la creación de empleo y el mejoramiento de la distribución del ingreso serían los principales objetivos declarados de su política económica.

Durante toda la gestión estuvieron latentes los conflictos de intereses entre el sector financiero, los sectores industriales y sindicales y los reclamos de la mayoría de la población, cada uno con reivindicaciones respecto a la defensa o recuperación de su nivel de ingresos ante la crisis. El gobierno no tenía definido de antemano un proyecto económico, sino que se fueron delineando sobre la marcha medidas tendientes a cumplir los objetivos planteados. Dada la ruptura generalizada de contratos, la principal meta era la estabilización de la economía.

Finalmente, el 6 de enero de 2002 la convertibilidad dejó de funcionar a través de la sanción de la Ley de Emergencia Económica, que daría marco a la política económica de la flamante administración peronista. En esa norma también se dispuso la pesificación de las tarifas de servicios públicos y de los préstamos por montos inferiores a 100 mil dólares.

Respecto de la política cambiaria, la propuesta inicial fue la de fijar un tipo de cambio dual. Por un lado, uno comercial, fijado en 1,40 peso por dólar, donde debían liquidarse las divisas del intercambio de bienes con el exterior. Por otro, el libre estaría determinado por el mercado, donde se realizarían las transacciones financieras. La idea de los gestores del plan era que en el mediano plazo ambos convergieran. Sin embargo, dos semanas después de lanzado ese régimen la diferencia ya era considerable. La unificación del mercado cambiario se impuso bajo la presión del FMI y por la evolución del tipo de cambio libre. A pesar de que los acuerdos con este organismo se planteaban como una garantía de estabilidad, la medida constituía un riesgo muy grande. En un contexto de incertidumbre como el que reinaba en esos momentos, la liberalización del tipo de cambio abría las puertas a una corrida que disparara el dólar.

Ante esta situación, el gobierno se planteó la posibilidad de una intervención fuerte en el mercado de cambios. Pero eso implicaba perder reservas internacionales, lo cual podía resultar contraprodu-



El presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, definieron la polémica pesificación asimétrica que benefició a ahorristas y también a bancos y grandes grupos económicos.

cente para generar credibilidad en el sostenimiento del tipo de cambio en un nivel más depreciado. Además, buena parte de las reservas (5000 millones de dólares) estaban compuestas por aportes del FMI, que reclamaba que no fueran usados para intervenir, ya que debían ser devueltos al organismo. Ante este dilema, el gobierno optó finalmente por dejar flotar libremente el dólar.

La pesificación de las tarifas terminó con los contratos establecidos en moneda extranjera que habían beneficiado las empresas de servicios públicos privatizados. La no actualización de las tarifas sería una medida fundamental para evitar la escalada inflacionaria. Por otro lado, el congelamiento permitiría aumentar la competitividad de la industria, tanto para las empresas que exportaban, que de esta forma licuaban los costos en dólares, como para las que vendían en el mercado interno, cuyos precios relativos comenzaban a mejorar. Esta política fue resistida por las empresas extranjeras que llevaron sus reclamos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando una supuesta ruptura de los contratos por parte del Estado.

Otra medida que apuntaba directamente a la recuperación de los márgenes de ganancia del sector productivo fue la pesificación de las deudas. Durante los años noventa la generalización de normas que permitían el uso de instrumentos financieros en moneda extranjera llevó a una progresiva dolarización del sistema. Con la debacle de la convertibilidad el principal desafío fue establecer una salida lo menos costosa posible. Esto llevaba irremediablemente a la identificación de perdedores y ganadores. La pesificación asimétrica fue el medio utilizado para establecer nuevas reglas que impulsarían la recuperación económica y amortiguarían, o eliminarían directamente, el impacto de la crisis financiera en los activos de los bancos y los depositantes.

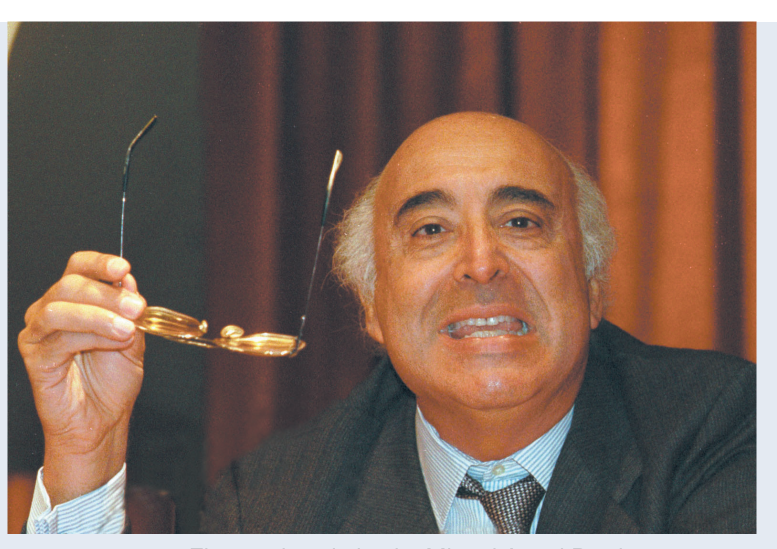
Ese esquema comenzó a definirse el 6 de enero, cuando se estableció la pesificación de las deudas por montos menores a los 100.000 dólares a fin de evitar la liquidación de empresas que se hallaban sumamente expuestas al riesgo cambiario. Sólo las compañías que tenían ingresos en dólares habrían podido honrar las deudas, mientras que la gran mayoría habría quedado en una situación de insolvencia, sobre todo considerando la recesión de casi cuatro años. Según un estudio que en su momento realizó el Banco Mundial, la mayor parte de los créditos no podrían ser repagados en las condiciones por entonces imperantes. Esto ponía en una situación dramática no sólo a las empresas industriales sino también a los bancos, que con el incremento de su cartera de morosos y/o incobrables quedarían al borde de la quiebra.

La necesidad de buscar una salida que no condenara al sistema financiero por la presión de los sectores industriales derivó en la ampliación de la pesificación para los préstamos de más de 100.000 dólares. Esta controvertida medida sería objeto de un intenso debate. Se trataba de una innecesaria transferencia de recursos hacia grandes empresas, muchas de las cuales gozaban de ingresos en dólares.

GA LE RIA

Los economistas del establishment

Expertos en pronósticos errados



El consultor de la city Miguel Angel Broda pronosticó un dólar a 20 pesos.

El derrumbe de la convertibilidad precipitó también una crisis de hegemonía, a cuya construcción habían contribuido una serie de profesionales de las ciencias económicas, que a su vez estaban asociados a un nuevo modelo de inserción de cuadros en el quehacer de la política económica y su defensa intelectual. La década del noventa se caracterizó por el desembarco masivo en los espacios de gestión y en los medios de comunicación del economista "independiente", amparado en la fortaleza edificada a partir de la posesión de un saber presuntamente técnico, disociado de todo tipo de identidad política e ideológica. Entidades como FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), Fundación Mediterránea y el CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos) proveyeron sus recursos humanos –cuya labor era financiada por grandes empresas, reflejando así la inobjetable dependencia de ciertos intereses económicos– para intervenir en la escena mediática, asesorar a comunicadores sociales y dirigentes políticos y, por sobre todo, diseñar e instrumentar la política económica de los distintos gobiernos que se sucedieron a lo largo de la década. Ricardo López Murphy, Domingo Cavallo y Roque Fernández fueron, respectivamente, los hombres que aportaron cada una de esas organizaciones para el manejo del Ministerio de Economía.

Luego de sostener durante años que la salida del régimen cambiario era irrealizable, cuando se concretó la devaluación pasaron a pronosticar y predicar la hecatombe. Todos los días se podían leer en los diarios y escuchar en la radio y la televisión las advertencias acerca de que el dólar valdría ocho o diez pesos, la inflación se dispararía y que el sistema financiero se desplomaría. Por ejemplo, Manuel Solanet (FIEL) declaró el 22 de abril de 2002 a *El Cronista* que "el sistema financiero se va a quedar con pocos o ningún depósito; van a pasar muchos años antes de que un argentino vuelva a hacer un plazo fijo en el país". Miguel Angel Broda, el consultor más cotizado de la city, en una reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas realizada al día siguiente, afirmó que "el mejor escenario esperable es que a fin de año el dólar cueste 5 pesos y la inflación supere el 175 por ciento; el peor es un dólar a 20 pesos y una hiperinflación del 1100 por ciento". Jorge Avila (CEMA), por su parte, manifestó que "no habrá moneda ni banca por dos generaciones; esto termina en una hiperinflación". Pedro Pou, quien fuera presidente del Banco Central y uno de los principales exponente del CEMA, abonaba la tesis de la disolución nacional, afirmando que "a medida que aumente el dólar libre, los efectos patrimoniales de la devaluación amenazan con desintegrar la Nación" (**Página|12**, suplemento **Cash**, 27/10/2002).

En muchos casos, estas expresiones buscaban crear el clima propicio para apuntalar el objetivo de máxima: frente al "recreo ferozmente populista, en el que todas las ganas contenidas contra el modelo, contra la convertibilidad y contra el capitalismo, han encontrado marco para explayarse", como señalaba Avila, la propuesta alternativa pasaba por transitar el camino de la dolarización. Entre los argumentos utilizados para defender el abandono definitivo de la moneda nacional estaba la idea de que la dolarización actuaría como un chaleco de fuerza que, al bloquear la posibilidad de emitir moneda, impediría las políticas económicas "discrecionales e irresponsables". Esta visión se alineaba con la posición de economistas extranjeros, como la del chileno Ricardo Caballero y del estadounidense Rudi Dornbusch, ambos del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Estos dos profesionales llegaron a sostener que "la Argentina debe ceder ya mismo buena parte de su sistema monetario, fiscal, de regulación y gestión soberana de sus activos por un período extenso. Digamos cinco años".

Esos pronósticos no se terminaron cumpliendo. La vigorosa recuperación de la economía y el empleo dejó al descubierto las mentiras de los economistas del establishment.

4 Salvataje estatal a *empresas y ahorristas*

Además de la pesificación de las deudas, el gobierno tomaría otra medida que apuntaba a amortiguar el impacto negativo de la devaluación sobre el empresariado local: la modificación de la Ley de Quiebras. Durante el gobierno de Menem se había establecido una ley favorable a los acreedores. La misma incorporaba la llamada cláusula *cramdown*, que les concedía a los acreedores el derecho de quedarse con la empresa deudora que no abonara sus obligaciones. La devaluación en un contexto recesivo dejaba una innumerable cantidad de compañías muy endeudadas y con activos desvalorizados en dólares. La gestión de Duhalde, en enero del 2002, cambió transitoriamente la ley para evitar la liquidación de parte importante del sector productivo, suspendiendo por 180 días hábiles los concursos preventivos y ejecuciones hipotecarias y prendarias de cualquier origen. Esta medida fue ampliamente rechazada por el sector financiero, que presionó junto con el FMI para el reestablecimiento de la ley original. Hasta tal punto llegó esa confluencia de intereses que el Fondo puso este tema entre las condiciones para llegar a un nuevo acuerdo con el país.

Entre tanto, comenzó a perfilarse la respuesta a otro de los principales interrogantes: la recuperación de los depósitos acorralados en el sistema financiero. Contrariamente a lo que había prometido Duhalde en su discurso de asunción, la devolución de los depósitos nominados en dólares no se concretó. El problema en la crisis de 2001 radicaba en que gran parte de los depósitos estaban nominados en moneda extranjera. Debido a que el Banco Central no podía emitir dólares ni conseguirlos mediante emisión de deuda, no había forma de obtenerlos para asistir a los bancos. Por otra parte, el engaño esperanzador respecto de que las filiales de los bancos extranjeros podrían devolver los depósitos a través de giros desde sus casas matrices se derrumbó. Frente a ese panorama quedaban dos opciones: dejar a los bancos a merced de los depositantes, forzándolos a conseguir los dólares; o eximirlos de entregar los dólares a los depositantes. El plan del gobierno se orientó a esa segunda opción.

Sin embargo, no solamente el problema eran los depósitos nominados en dólares. El reintegro de los ahorros en pesos al tipo de cambio vigente también resultaba complicado. Si bien el Banco Central podría haber aportado los fondos mediante redescuentos emitiendo pesos, la liquidez derivada de ello hubiese ido a engrosar la demanda de divisas, allanando el camino para que se disparara aún más el tipo de cambio. En este sentido, la flexibilización del corralito –consistente en elevar hasta 1500 pesos por mes el monto máximo a extraer de las cajas de ahorro– ya planteaba dificultades. De todas formas, si bien el Banco Central no otorgó la suma suficiente a los bancos comerciales para que devolvieran la totalidad de los depósitos, fue proveyendo la mayor parte del dinero que salía del sistema financiero. Entre enero y mayo del 2002, la caída total de depósitos fue de 16.857 millones de pesos, mientras que los redescuentos otorgados por el BCRA sumaron 10.116 millones, el 60 por ciento del total.



El canje de depósitos acorralados por bonos compensó a los ahorristas.

Esa masa de dinero fue insuficiente para provocar la disparada del dólar y la tan temida hiperinflación. La "salida" de la crisis emitiendo, generando las condiciones propicias para una hiperinflación, era la predilecta tanto del FMI como del establishment financiero. Ambos creían que para iniciar el camino de la recuperación era necesaria primero una profundización de la crisis que diera impulso a una renovación política y le permitiese a ese establishment retomar el control de la política económica.

El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y su equipo no comulgaban con esta idea. Si bien varias de las medidas tomadas no respondían a un plan claro, descartaban esa supuesta solución. La respuesta al goteo de pesos que iba a la demanda de dólares dentro del pequeño margen que ofrecía el corralito fue la reprogramación de depósitos y posteriores planes de canje por bonos. El establecimiento del "corralón", el 10 de enero, fue el primer paso en esa di-



Duhalde modificó la Ley de Quiebras para proteger de los acreedores a las empresas endeudadas.

rección. Este consistió en la reprogramación de la devolución de los depósitos a plazo. Según estuvieran denominados en pesos o dólares, las colocaciones pasarían a reintegrarse a partir de marzo de 2002 o enero de 2003, respectivamente. Esta medida inmovilizaba de forma temporaria a alrededor del 75 por ciento de los depósitos en dólares.

Al congelar los ahorros e imposibilitar su redireccionamiento a la compra de divisas, se abrió un margen para liberar medios de pagos y proveer liquidez al mercado para realizar una diversidad de transacciones corrientes, que hasta ese momento se hallaban sumamente restringidas debido al corralito. A partir de febrero se pudo disponer de la totalidad de las cuentas sueldo, que favoreció a cierta recuperación de la demanda de bienes que se veía imposibilitada de materializarse por la falta de circulante. Otra medida dirigida a destrabar los depósitos acorralados y que tendió a aumentar la demanda fue permitir la compra de automóviles e inmuebles con depósitos atrapados en el corralito. Esto ayudó al inicio de la reacción de la industria automotriz y la construcción, que en los años siguientes liderarían la expansión de la economía.

En medio de estas medidas tendientes a abrir el corralito se produjo un cambio en la cúpula del Banco Central. El 18 de enero Mario Blejer, ex funcionario del FMI, reemplazó a Roque Maccarone, que había llegado al puesto de la mano de Domingo Cavallo.

El drenaje de pesos, producto de la extracción semanal que permitía el corralito y de los amparos que se multiplicaban, continuaba y presionaba sobre el tipo de cambio y el sistema financiero. Esto imponía la búsqueda de una solución definitiva. El equipo de Remes decidió entonces realizar una propuesta de canje voluntaria de los depósitos por bonos. Se ofreció un menú de tres bonos diferentes, dos en dólares y uno en pesos, con tasas del 2 por ciento anual, atadas a la tasa Libo o al CER en el caso de los bonos en pesos, que serían pagados en un período de entre 5 y 10 años. El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) es un índice publicado por el Banco Central. Este se calcula teniendo en cuenta la inflación pasada medida por el Indice de Precios al Consumidor, y fue utilizado como un factor de indexación de los bonos en pesos.

La oferta que el gobierno realizó, en conjunto con la conversión de las deudas de dólares a pesos, comenzó a delinear la pesificación asimétrica: deudas en dólares pagadas 1 a 1 en pesos y depósitos en dólares reconocidos a un tipo de cambio mayor que el vigente en la convertibilidad.

Ese canje inicial tuvo una muy baja aceptación entre los ahorristas, que seguían reclamando fervientemente por sus dólares, al punto de organizarse en función de este reclamo particular. El equipo económico pasó a evaluar entonces la posibilidad de un canje compulsivo, que requería de una ley que fuera aprobada por el Congreso. Finalmente, el 24 de abril, ante la señal del Congreso de que esa medida no iba a ser aprobada y con el convencimiento de que no había otra opción para salir de la crisis, Remes Lenicov presentó su renuncia.

El candidato a sucederlo era Alieto Guadagni, que planteaba el camino de la ruptura con el FMI. Al día siguiente del encuentro en que se discutió dicha posibilidad, varios gobernadores justicialistas y radicales llegaron a Olivos con una propuesta alternativa, y un documento con catorce puntos para evitar el cambio de rumbo. En el espíritu del documento estaba retomar el sendero indicado hasta esos días por Remes y Duhalde y continuar con la búsqueda de un acuerdo con el FMI, desechando la propuesta de Guadagni de fijación del tipo de cambio en 3,20 pesos y de ruptura de relaciones con el organismo. Otros puntos relevantes del documento eran el apoyo a la sanción de la Ley de Quiebras y la derogación de la Ley de Subversión Económica, ambos en apoyo a los reclamos que venía realizando el FMI, así como la necesidad de sancionar un nuevo sistema de coparticipación de impuestos y la reducción del déficit fiscal de las provincias.

Luego de desechar una serie de candidatos, entre los que se encontraba Guillermo Calvo y Carlos Melconian, Duhalde terminó optando por Roberto Lavagna. Su voluntad de entablar negociaciones con el FMI y sus afirmaciones desligando a las provincias de la responsabilidad sobre el déficit fiscal fueron bien vistas por los gobernadores, quienes finalmente apoyaron su nombramiento como ministro.

5 Retenciones y situación fiscal. *Plan Jefas y Jefes de Hogar*

A mediados de enero de 2002, se anunció la aplicación de retenciones del 20 por ciento a la exportación de crudo, medida que meses más tarde sería extendida a un grupo más amplio de productos. El 4 de marzo, el mismo día que se presentaba el Plan Remes para el canje de bonos, se impusieron retenciones de 10 por ciento para productos primarios y 5 por ciento para manufacturas agroindustriales e industriales, mientras se mantenía el 20 por ciento para hidrocarburos.

Las retenciones cumplían una multiplicidad de funciones que se empezaba a delinear. Constituían una herramienta para amortiguar el traslado a precios internos de la suba del tipo de cambio. La disminución de los ingresos por exportaciones que las retenciones generaban llevaba a los productores a volcar una menor parte de su producción al mercado externo, hasta que los precios internos se igualasen a los internacionales (multiplicados por el tipo de cambio) menos las retenciones. Por otro lado, las retenciones, en conjunto con el incremento de la recaudación por el efecto inflacionario, permitían mejorar el resultado fiscal, alcanzando un superávit primario que se convertiría luego en pilar del discurso económico oficial.

Además, las retenciones establecían una suerte de sistema de tipos de cambio múltiples que morigeraba la rentabilidad del sector exportador y permitía equiparar la competitividad relativa respecto a otros sectores con menor productividad. Asimismo, este mecanismo influía positivamente en la distribución del impacto de la devaluación, en tanto aumentaba la cantidad de sectores productivos beneficiados y contribuía a morigerar el aumento de los precios de los productos exportados, muchos de ellos alimentos para la mayoría de la población.

Los sectores alcanzados por la política de retenciones reaccionaron presionando al gobierno para su suspensión. Mientras las petroleras anunciaban subas en el mercado interno para compensar la caída de sus ingresos por exportaciones, el sector agropecuario demoraba la liquidación de las divisas obtenidas por sus ventas al exterior. Pero ninguna de las acciones logró su cometido y el esquema se mantuvo vigente.

Sobre la base de esos recursos y empujado por la magnitud de la crisis social, que representaba una amenaza permanente a la sustentabilidad política de su gobierno, Duhalde tomó una de las decisiones más importantes de su gobierno, pese al escaso apoyo de su equipo económico: el lanzamiento del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que implicaba la entrega de 150 pesos a cada jefe de familia. Hasta ese momento, ese tipo de planes sociales tenían un alcance significativamente menor. Durante los gobiernos de Menem y De la Rúa había alrededor de 400 mil personas beneficiarias de Planes Trabajar. El Plan Jefes, por el contrario, se planteó en primera instancia como de carácter universal, y alcanzó entre julio y agosto a más de dos millones de personas. Además, la lista de los beneficiarios se descentralizó, quedando en manos de Cáritas, los municipios y diversas organizaciones sociales.

El establecimiento de los Planes Jefas y Jefes de Hogar fue fundamental en un contexto donde el descontento social presionaba al gobierno. El impacto inflacionario de la devaluación y el muy elevado desempleo, sumado a la falta de legitimidad de origen del gobierno, ponían a Duhalde en una situación sumamente frágil. Los planes amortiguaron el conflicto social y estuvieron, en conjunto con el manejo de la política cambiaria y la salida de la crisis financiera, entre las principales medidas económicas del gobierno de Duhalde.





Casi 2 millones de personas empezaron a recibir 150 pesos mensuales con el Plan Jefas y Jefes de Hogar.



Jorge Todesca

"Cavallo dejó un muerto y nosotros lo enterramos"

POR FEDERICO PASTRANA Y ANDRÉS TAVOSNANSKA

Jorge Todesca es licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado sobre Administración de Planes de Corto Plazo en el Centro Interamericano de Capacitación en Administración Pública, de la Organización de los Estados Americanos. Fue viceministro de Economía de la Nación, secretario de Comercio Interior y vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En el plano académico se desempeñó como profesor de grado y de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Católica, Regional de Mar del Plata y Del Salvador. Es autor del libro *El mito del país rico*.

Usted fue viceministro de Economía en el gobierno de Duhalde. ¿Cuál fue el plan inicial?

–Con el ministro Jorge Remes Lenicov habíamos colaborado en la campaña presidencial de Duhalde de 1999. En ese momento examinamos las posibilidades de sostener la convertibilidad, pero también de reconvertirla a un sistema de canasta de monedas. Luego comenzamos a pensar la cuestión de salir del sistema de la convertibilidad. Nosotros evaluábamos que el desajuste del nivel del tipo de cambio era de alrededor de un 40 por ciento, lo cual suponía que no iba a haber grandes dificultades para estabilizar el sistema financiero e intentar cambiar la denominación de la moneda mediante un mecanismo de extensión de los plazos y atenuación de las tasas. Mientras tanto, la situación se agravaba día a día, llegando al punto máximo con el corralito. La economía no funcionaba porque se habían restringido al máximo los medios de pagos y el sistema financiero estaba en crisis. Así que nosotros optamos por el estudio de las crisis financieras. La gran lección que brindan esas crisis es que uno tiene que tratar de ir administrando sus efectos a lo largo del tiempo. Si uno trata de resolver el cúmulo de problemas en un solo instante, el colapso se agrava. En el caso argentino la crisis económica era simultánea con una crisis de liderazgo político. Esto hacía más difícil la aceptación del gradualismo de las medidas.

En ese sentido, ¿cómo era evaluado el establecimiento de un tipo de cambio dual?

–Había que tomar una decisión sobre cómo salíamos de la convertibilidad. Todos pensábamos que lo mejor era un régimen de flotación porque había muy pocas reservas. Sin embargo, tuvimos la percepción de que una liberación abrupta del tipo de cambio, en un contexto de pronósticos muy pesimista, podía instalar la paridad en un umbral extraordinariamente alto. Con el nivel de reservas que teníamos analizamos que bajarlo iba a ser muy difícil. Con no muchas expectativas establecimos el tipo de cambio dual en 1,40 peso por dólar. Esto sirvió para poner algunas reglas para el sistema financiero que perduraron en el tiempo. Cuando comenzó a desbordarse se planteó la alternativa de si usamos o no reservas. Ahí la decisión fue no hacerlo. Si lo hacíamos y salía mal la Argentina iba camino a una hiperinflación.

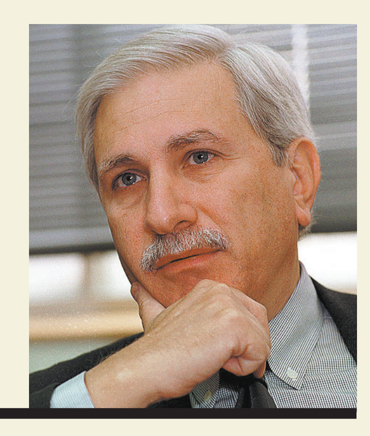
> Se beneficiaron con la pesificación empresas, actividades e individuos que tenían capacidad para pagar más de 1,40. No encontramos la manera de poner una línea divisoria.

¿Cuál era la situación que podía desembocar en una hiperinflación?

–El tipo de cambio no se dispararía mientras nosotros no saliéramos a emitir. Las hipótesis de que se iba a ir a 10, 20, 40 pesos eran hipótesis sobre cosas que creían que nosotros íbamos a hacer. Por caso, que íbamos a mandarnos alocadamente a emitir porque éramos irresponsables, inexpertos, ignorantes. Fuera lo que fuéramos, no lo hicimos.

¿Cree que había intencionalidad política en los pronósticos que auguraban que el dólar llegaría a 10 pesos?

–Sin lugar a dudas, había la peor de las intencionalidades. Había un gran compromiso de ese conjunto de economistas y analistas financieros con la convertibilidad. Compromiso en consejos de negocios. Entonces, había un gran esfuerzo en demostrar



que la salida de la convertibilidad había sido fruto de la torpeza de los que llegaron. Cavallo dejó un muerto pero sin enterrarlo. Nosotros lo enterramos y nos gritaron “asesinos, asesinos”. Había habido opiniones públicas de que la convertibilidad se sostenía, alentando a los ahorristas a dejar sus ahorros en los bancos y recomendando a sus clientes que retiraran sus depósitos. Por otra parte, una parte del FMI, Anne Krueger en especial, planteaba que la manera de salir de la crisis era dejar flotar el tipo de cambio y emitir todo lo que el mercado pidiera y que se produjera la hoguera y que en ésta se consumiera la crisis. Todo ese conjunto de “expertos” planteaba que la crisis de la convertibilidad se resolviera no con una transición hacia otro momento económico, no de manera gradual, sino por un colapso inicial de ese nuevo modelo económico que permitiera retomar las riendas una vez que otros hubieran fracasado más de lo que fracasaron ellos. Fue un acierto no seguir esas políticas.

Respecto de la pesificación asimétrica, se planteó hasta 100 mil dólares y después se amplió. ¿Por qué?

–La pesificación fue ganando momentos. El de los 100 mil pesos no era el del dólar a 3 pesos. Primero estuvo la Ley de Emergencia, con una pesificación hasta 100 mil dólares. Sin embargo, cuando el dólar comenzó a aumentar, el contexto cambió. El Banco Mundial mandó una misión de expertos y evaluaron que la mora en el sistema bancario iba a llegar del 60 al 70 por ciento. Esto cambió un poco el enfoque. Entonces la pesificación fue ganando terreno. Obviamente, la Unión Industrial Argentina tenía bastante pensado el proyecto. Pero lo cierto es que el sistema financiero se derrumbaba si no se hacía algo. Los créditos no se iban a poder pagar, los depósitos no se iban a poder constituir y los bancos iban a quebrar. Así que la discusión se concentró en las condiciones de la pesificación. Tenía que ser todo uno a uno.

¿Y con los ahorristas?

–Respecto de los ahorristas, los abogados del ministerio dijeron que esa posición era insostenible porque no se respetaba el principio de preservar el poder adquisitivo. Esto llevó a la cuestión del 1,40 peso más el CER. Para las deudas empezó un gran debate. Finalmente se adoptó la decisión política, bajo la idea de que eso generaba condiciones de equilibrio para que las empresas se volvieran a poner en producción. La revisión de quiénes eran los sectores beneficiados era bastante clara. En el sistema financiero las grandes empresas estaban endeudadas en el exterior. Además, los listados mostraban 3000 empresas claves para poner en funcionamiento de nuevo la economía y sus niveles de endeudamiento. La pesificación asimétrica fue una medida apoyada por la dirigencia política, por el presidente, por nosotros y por los sectores de la producción.

> La lección de esas crisis es que hay que tratar de ir administrando sus efectos a lo largo del tiempo. Si uno trata de resolver los problemas en un solo instante, el colapso se agrava.

¿Cuáles son las medidas de política económica adoptadas que más rescata?

–La pesificación fue una medida muy acertada. Probablemente se podría haber hecho de una manera más selectiva del lado de las deudas. Se benefició con la pesificación empresas, actividades e individuos que tenían capacidad para pagar más de 1,40. No encontramos la manera de poner una línea divisoria. Las retenciones fueron otro acierto. Nunca se me hubiera ocurrido que podíamos producir semejante transferencia instantánea de renta. La demora en aceptar el establecimiento de las retenciones fue un hecho muy negativo. Duhalde se convenció totalmente de eso cuando emprendió lo que para mí fue un acierto extraordinario de su gestión: los Planes Jefas y Jefes. En ese entonces el cuadro social era incontrolable. Ese plan produjo inmediatamente un cambio en la situación. En ese momento el gobierno estaba jaqueado por marchas de un lado y de otro y los planes permitieron calmar ese crítico panorama.



“El que depositó dólares recibirá dólares”

Discurso de asunción del presidente Eduardo Alberto Duhalde, el 1º de enero del 2002.

Honorable Asamblea Legislativa; querido pueblo de mi patria: he sido designado por esta Asamblea Legislativa para ocupar la Presidencia de la Nación hasta el 10 de diciembre del año 2003.

Mi compromiso, a partir de hoy, es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza.

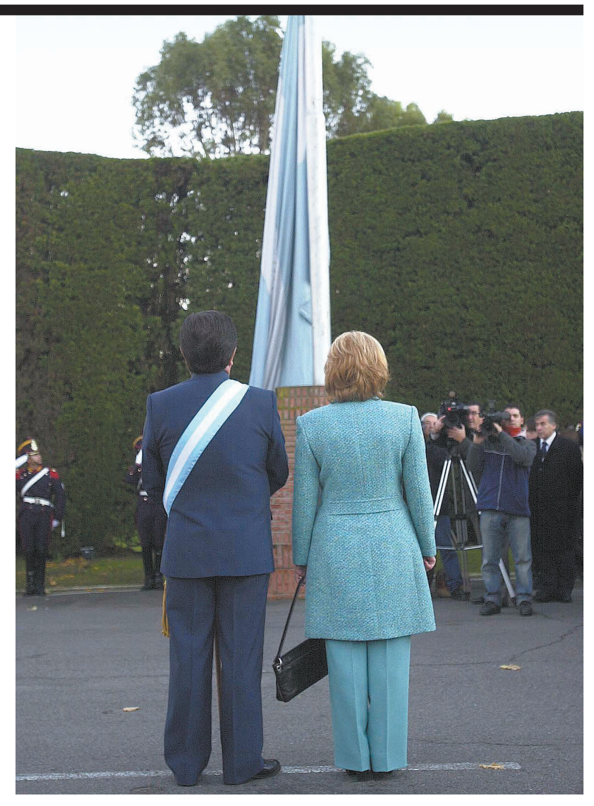
Necesitamos la comprensión y la cooperación internacional. Hemos tenido que suspender el pago de los intereses de nuestra deuda pública porque no estamos en condiciones de hacerlo en estas circunstancias críticas que han generado una fuerte eclosión social. Y la única manera de hacer frente a nuestros compromisos internos y externos es mediante el crecimiento de nuestra economía que derive en un auténtico desarrollo humano.

A los afectados por el “corralito” les digo que el Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, que el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos.

No es momento, creo, de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. Hoy, la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados; la cadena de pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía.

Los pueblos toleran cualquier circunstancia adversa. ¡Y vaya si lo toleran! Lo que ningún pueblo tolera es el caos, la anarquía. Y quiero decirles que el caos y la anarquía que vivimos no se resuelven con balas ni con bayonetas, se resuelve ocupándonos seria y responsablemente de los problemas que afligen a millones y millones de excluidos en la República Argentina.

Esta gestión que hoy mismo comienza su tarea se propone lograr pocos objetivos básicos: primero, reconstruir la autoridad política e institucional de la Argentina; segundo, garantizar la paz en Argentina; tercero, sentar las bases para el cambio del modelo económico y social.



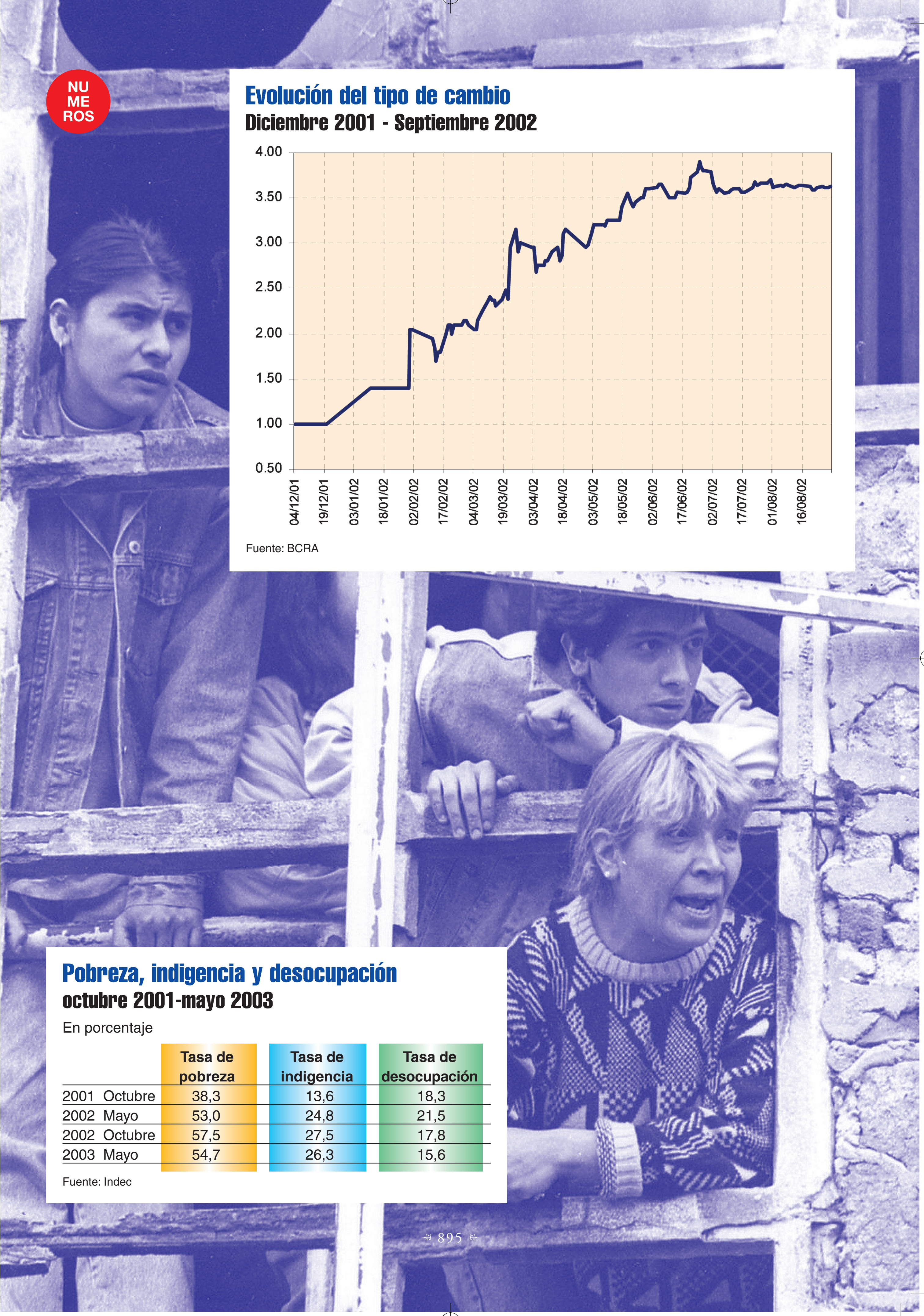
Duhalde, con su mujer Hilda, no pudo cumplir con la promesa a los ahorristas ofrecida en su discurso de asunción.

Sentar las bases de un modelo nuevo económico, social, cultural, significa romper definitivamente con el pensamiento único que ha sostenido y sostiene que no hay alternativa posible al modelo vigente. Esa es una falacia teórica que sólo ha podido sostenerse en la Argentina en el marco de la falta de un debate nacional serio y profundo.

La tarea que tenemos por delante es difícil. Pero tenemos que recrear las condiciones para que la Argentina vuelva a traer inversiones productivas. Debemos reconstruir el cuerpo de nuestras empresas e industrias que son las grandes generadoras de empleo.

Venimos a poner de pie y en paz a la Argentina. La Argentina, lo sabemos, lo sentimos, tiene futuro. Por eso, hoy tenemos que ser más argentinos que nunca.

No lo duden, no lo duden un solo instante: Argentina tiene futuro.



Evolución del tipo de cambio

Diciembre 2001 - Septiembre 2002

Fuente: BCRA

Pobreza, indigencia y desocupación

octubre 2001-mayo 2003

En porcentaje

	Tasa de pobreza	Tasa de indigencia	Tasa de desocupación
2001 Octubre	38,3	13,6	18,3
2002 Mayo	53,0	24,8	21,5
2002 Octubre	57,5	27,5	17,8
2003 Mayo	54,7	26,3	15,6

Fuente: Indec

Bibliografía

BASUALDO, EDUARDO, LOZANO, CLAUDIO, SCHORR, MARTÍN, "Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia Duhalde. El nuevo plan social del gobierno", revista *Realidad Económica*, Nº 186, Buenos Aires, 2002.
BASUALDO, EDUARDO, *Sistema político y modelo de acumulación en Argentina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
BONELLI, MARCELO, *Un país en deuda. Argentina y su imposible relación con el FMI*, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2004.
DAMILL, MARIO, "El balance de pagos y la deuda externa pública bajo la Convertibilidad", *Boletín Informativo Techint,* Nº 303, Buenos Aires, 2000.
DUHALDE, EDUARDO, *Memorias del incendio. Los primeros 120 días de mi presidencia*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007.
HEREDIA, MARIANA, "El proceso como bisagra. Emergencia del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA", en Pucciarelli, A. (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, 2004.
LEVY YEYATI, EDUARDO y VALENZUELA, DIEGO, *La resurrección. Historia de la poscrisis argentina*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007.
NATANSON, JOSÉ, *Buenos Muchachos: Vida y Obra de los Economistas del Establishment*, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2005.
RAPOPORT, MARIO, *Historia económica, política y social (1880–2003)*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
SCHVARZER, JORGE y FINKELSTEIN, HERNÁN, "Moneda, magia y especulación. La política financiera de la convertibilidad", mimeo, 2007.
SCHVARZER, JORGE y FINKELSTEIN, HERNÁN, "El corralito durante el mes de mayo: ¿un veranito de San Juan?", Nota de Coyuntura N 2, CESPA, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, 2002.
TODESCA, JORGE, *El mito del país rico. Economía y política en la historia argentina, 2006,* Buenos Aires, Editorial Emecé, 2006.
ZAIAT, ALFREDO, *¿Economistas o astrólogos? La economía de los '90*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2004.

Ilustraciones

(Tapa) La city porteña, 6 de febrero de 2002. Fuente DyN.
(Págs. 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 891, 893 y 895) Archivo **Página|12.**
(Pág. 887) Archivo Télam.
(Págs. 890 y 894) Archivo DyN.